Lunes 6 Febr/87

Miguel Angel Granados Chapa

¿Dónde está Gabriel Valles?

El tabú de los militares

A los 23 años, Gabriel Fernando Valles Martínez era comandante de la Policía Judicial de Durango, a cargo del retén en Santiago Papasquiari. El 25 de febrero pasado, el procurador de Justicia de aquella entidad, Pacheco Hernández, por encargo del gobernador José Rodríguez Gamero —cuya familia tiene vieja amistad con la de Valles Martínez— confirió una comisión secreta a Gabriel. Cumplida que fue ésta, cuya naturaleza se ignora, Valles Martínez se presentó al día siguiente ante su superior, para darle cuenta de lo ejecutado. Allí mismo, un teniente de la Policía Judicial Militar, Amador García Estrada, lo detuvo, y lo condujo al cuartel de la décima zona militar. De allí salió, en manos del teniente García Estrada, oficialmente hacia la ciudad de México.

En realidad, según parece, se le condujo a Guadalupe Victoria, donde se le interrogó, según consta en una acta que está en posesión de la Procuraduría General de Justicia Militar, misma oficina donde obra también un extraño documento que es como el acta de libertad de Valles Martínez, fechado en Gómez Palacio, donde presuntamente se le dejó libre. Desde entonces, hace ya más de un mes, no se sabe nada de Gabriel.

Cuando fue detenido, se le notificó que la causa era el delito de desertión. Valles Martínez había pertenecido, en efecto, al Ejército: durante un breve periodo en 1983 actuó en la Policía Judicial Militar. En agosto de aquel año causó baja, pero aun si hubiera desertado, el delito habría ya prescrito en febrero de 1987; además, no suele perseguirse tal ilícito,

por razones imprácticas, dado el gran número de militares que lo cometen. De cualquier modo, el acta de interrogatorio a Gabriel Valles no se refiere a su desertión. Se le preguntó, en cambio, sobre una banda de narcotraficantes, detenida en Petatlán, Guerrero, uno de cuyos miembros habría denunciado a Valles como quien lo proveyó de una credencial falsa de la Policía Judicial Militar.

Gabriel negó los cargos, según consta en la misma acta. Naturalmente que no basta rehusarse a admitir acusación para que ésta quede sin efecto, pero lo propio entonces era que en efecto Valles Martínez hubiera sido enjuiciado, si su negativa era insatisfactoria. Pero no se le condujo, como creyó el general Mario Castillo, jefe de la zona militar, al Campo Militar

Número Uno, en la ciudad de México, sino a Guadalupe Victoria, como consta oficialmente. Sorprende, por consecuencia, que se le hubiera dejado en libertad después de interrogársele de manera irregular, y que por ello se le hubiera trasladado a otra ciudad.

Según testimonio de la familia de Gabriel, el propio gobernador Ramírez Gamero se ocupó del asunto. El 13 de marzo le habría dicho que tras comunicarse con el procurador militar, general Jorge Rico Schoreder, estaba persuadido de que el muchacho “estaba bien” y anticipó que “será cosa de esperar dos o tres días para que lo tengamos nuevamente con nosotros”. Y aun añadió: “Yo le juro, señora —dirigiéndose a la madre—, que Gabriel está en perfectas condi-

ciones”. El 17 de marzo, sin embargo, el gobernador recibió a la señora Valles y le preguntó, como si el asunto le fuera ajeno: “¿Qué ha sabido de su hijo, señora?”.

Ni entonces ni ahora la familia tiene noticia del protagonista de este extraño caso, que debe ser ventilado públicamente. Sabemos que inmiscuir a miembros del Ejército en asuntos delictivos es tema delicado, que debe tratarse con cautela, pues el pundonor militar y una excesiva, a juicio nuestro, tendencia a considerar que los asuntos cas strensenses no son de interés público, sustraen con frecuencia ese mundo de la atención y el escrutinio general. Creemos que no debe ser así, y puesto que hay indicios que obligan a una consideración pública, abierta de este caso, debe procederse en consecuencia.